



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 26 agosto de dos mil veintidós (2022)

Auto interlocutorio No. 274

ASUNTO:	IMPEDIMENTO
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO -LABORAL
REFERENCIA:	76111-33-33-002-2021-00180-01
ACCIONANTE:	JOSÉ EVERS RAMÍREZ ORTEGA carlosdavidalonsom@gmail.com
ACCIONADO:	NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co
ASUNTO:	AUTO ORDENA REMITIR EL EXPEDIENTE AL JUZGADO ADMINISTRATIVO TRANSITORIO CON SEDE EN CALI LEY 1437/2011

MAGISTRADO PONENTE: EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS

I. ANTECEDENTES

El señor José Evers Ramírez Ortega, por conducto de apoderado judicial en el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se declare la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales negó el reconocimiento de carácter de factor salarial de la bonificación judicial prevista en el Decreto 382 de 2013, para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales.

Por su parte el Juez Segundo de Buga, se declaró impedido para conocer del asunto invocando la causal prevista en el numeral 1º del artículo 141 del CGP¹; igualmente consideró que este impedimento comprende a todos los jueces administrativos de ese circuito. En vista de ello remitió el proceso al Tribunal, precisando lo siguiente:

“El objeto de la demanda en comento es que se reconozca la bonificación judicial como constitutiva de un verdadero factor salarial para liquidar todas las prestaciones económicas devengadas y las que se causen a futuro y como consecuencia de lo anterior solicitan el pago y reliquidación de todas las prestaciones sociales devengadas, debidamente indexadas.

Al respecto, considero que la bonificación judicial tiene idéntica proposición jurídica, independientemente de que se encuentre en un Decreto especial para la Fiscalía General de la Nación, de tal suerte que si en el actual proceso se busca otorgarle carácter salarial a la bonificación judicial, el pronunciamiento que se haga me beneficiaría indiscutiblemente porque los mismos criterios me favorecen

¹ “Son causales de recusación las siguientes:
1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.”

para solicitar el carácter salarial de la misma bonificación que devengo actualmente en calidad de Juez, y afirmo que **me interesa y me conviene plenamente que salgan adelante las pretensiones de la presente demanda.**

Esta posición ha sido asumida por el Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca conforme se desprende de lo referido en el Auto Interlocutorio No. 333 del 08 de julio de 2019 proferido dentro del proceso con radicado 76001-33-33-015-2019-00071-01, Magistrado Ponente: Doctor Ronald Otto Cedeño Blume² proveído en el cual se aceptó la configuración del impedimento que hoy se declara, señalando que si bien el origen normativo de las bonificaciones judiciales de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial tienen su génesis en cuerpos normativos diferentes (Decreto 0382 y 0383 de 2013, respectivamente), al centrarse el debate en la naturaleza salarial del emolumento, sí es posible que se afecte la imparcialidad de los funcionarios judiciales, porque ello podría conllevar a un beneficio para ellos.” (N.d.t.o.)

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Este Tribunal es competente para conocer del impedimento manifestado por el Juez Segundo Administrativo del Circuito de Buga, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 131 del CPACA, que prevé:

“Artículo 131. trámite de los impedimentos. Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas:

(...)

2. Si el juez en quien concurra la causal de impedimento estima que comprende a todos los jueces administrativos, pasará el expediente al superior expresando los hechos en que se fundamenta. De aceptarse el impedimento, el tribunal designará conjuez para el conocimiento del asunto.”

2.2. El caso concreto

En cuanto a las causales para manifestar el impedimento, el artículo 130 del CPACA prevé como tales para los magistrados y jueces administrativos, entre otras, las previstas en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil³, hoy artículo 141 del CGP el cual, en su ordinal 1º regula:

“Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso”.

Ahora bien, las pretensiones del demandante están encaminadas a que, como servidor de la Fiscalía General, se reconozca que la bonificación judicial que percibe es factor salarial.

² Consejo de Estado - Sección Tercera, Bogotá D.C, quince (15) de junio de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 19001-33-31-002-2011-00054-01 (59047).

³ En adelante CGP

Por su parte el artículo 1 del Decreto 382 de 2013, creó para los servidores de la Fiscalía General de la Nación a quienes se aplica el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 53 de 1993, y que vienen rigiéndose por el decreto 875 de 2012 y por las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud.

Al efectuar un análisis comparativo de la situación en que están inmersos tanto los empleados de la Fiscalía General de la Nación, acorde a lo contemplado en el Decreto 382 de 2013 en cuanto al carácter de la bonificación judicial, el cual pretenden que se tenga en cuenta para efectos de la liquidación de prestaciones sociales, como para los empleados y funcionarios de la Rama Judicial a los cuales se les ha establecido una estipulación jurídica similar según lo contenido en el Decreto 383 de 2013 respecto a que “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, veamos:

RAMA JUDICIAL	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Artículo 1º del Decreto 383 de 2013	Artículo 1º del Decreto 382 de 2013
Artículo 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Artículo 1º. Créase para los servidores de la Fiscalía General de la Nación a quienes se aplica el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto número 53 de 1993, y que vienen rigiéndose por el Decreto número 875 de 2012 y por las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

En estas condiciones el presente asunto lo que se debe analizar jurídicamente es si es viable que la bonificación judicial sea tenida en cuenta o no, solo, como base de cotización a los Sistemas Generales de Pensiones de Seguridad Social en Salud, o si por el contrario se debe tener como factor salarial para efectos de la liquidación de todas las prestaciones sociales.

En conclusión, le asiste la razón al Juez Segundo Administrativo del Circuito de Buga, toda vez que, como funcionario de la Rama Judicial, también percibe la bonificación de que trata el Decreto 383 de 2013, por lo que la decisión que se profiera en el proceso de la referencia puede afectar su imparcialidad.

Asimismo, se configura la causal de impedimento manifestada por sobre la totalidad de los Jueces administrativos del mismo circuito, debido a que tienen un interés directo en las resultas del proceso.

En efecto, se prescindirá que por la presidencia de esta Corporación se realice el sorteo del conjuer establecido en el numeral 2° del artículo 131 del CPACA, y en su lugar, se ordenará la remisión de la actuación Juzgado Administrativo Transitorio con sede en Cali, atendiendo lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo PCSJA22-11918 del 2 de febrero de 2022, que creó dicho despacho, con la finalidad de tramitar los procesos relacionados con las reclamaciones laborales y prestacionales contra la Rama Judicial y entidades con régimen similar, al que se le asignará el conocimiento de la demanda.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en Sala de Decisión,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento formulado por el Juez Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga, extensivo a los demás Jueces Administrativos de Buga, para conocer el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: ORDENAR que por secretaria se remita el expediente al Juzgado Administrativo Transitorio con sede en Cali, para que asuma el conocimiento de la demanda, lo anterior previo registro secretarial en SAMAI.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Providencia discutida y aprobada en Sala de decisión de la fecha. Acta No. 73

LOS MAGISTRADOS,

(firmado electrónicamente)
EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS

(firmado electrónicamente)
OSCAR SILVIO NARVAEZ DAZA

(firmado electrónicamente)
GUILLERMO POVEDA PERDOMO